

Center for Hemispheric Defense Studies

REDES 2002

Research and Education in Defense and Security Studies

August 7-10, 2002, Brasilia, Brazil

Panel on Efectos de las armas ligeras en Centroamérica

Armas Ligeras y Seguridad Regional

Carmen Rosa de León-Escribano

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible –IEPADES-

11 Avenida 15-17 Zona 10

Guatemala, Guatemala

(502) 366 2619

crdeleon@iepades.org.gt

Key Words:

Small Arms, Illicit Traffic, Regional Security

Abstract

Centroamérica se debate en la búsqueda la consolidación de la democracia, la gobernabilidad y la paz. Los fenómenos nacionales trascienden las fronteras y se convierten en problemáticas comunes para la región. Centroamérica está flanqueada por dos conflictos aún vigentes: Chiapas en la frontera con Guatemala y Colombia en la frontera con Panamá. Además de los propios conflictos internos que genera los cambios de modelos de seguridad y desarrollo, Centroamérica también tiene que lidiar con su posición geográfica como canal de paso hacia Colombia y hacia México y Estados Unidos. La droga, el crimen organizado, las armas, los emigrantes, todos pasan por ese gran corredor en que se ha convertido la región. Para todo ese tráfico, la debilidad institucional de los países es una ventaja. El problema del creciente armamentismo va ligado al deterioro de la seguridad ciudadana, la debilidad de las policías, la ausencia de una política más cooperativa entre los estados y a la falta de priorización de los gobiernos en el tema de la seguridad. Se analiza en el documento cómo las armas atentan contra la seguridad regional, provocando ingobernabilidad e inestabilidad. Así mismo se analiza el problema del tráfico ilícito a través de un caso concreto para concluir con los elementos que deben ser tomados en cuenta para la formulación de una política regional cooperativa en este tema, que incluya medidas para el impulso a los instrumentos regionales, control sobre la oferta y demanda de las armas y la participación de la sociedad civil.

Armas Ligeras y Seguridad Regional

Centroamérica se debate en la búsqueda la consolidación de la democracia, la gobernabilidad y la paz. Cada vez más los fenómenos nacionales trascienden las fronteras y se convierten en problemáticas comunes para la mayor parte de los países de la región. Países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala están en proceso de transición después de violentas guerras internas. Honduras no enfrentó conflictos abiertos, aunque se encuentra también transitando hacia una sociedad menos militarizada y más equitativa. Panamá se recupera de la invasión y los cambios estructurales que esto supuso.

La región está flanqueada por dos conflictos aún vigentes: Chiapas en la frontera con Guatemala y Colombia en la frontera con Panamá. Además de los propios conflictos internos que genera los cambios de modelos de seguridad y desarrollo, Centroamérica también tiene que lidiar con su posición geográfica como canal de paso hacia Colombia y hacia México y Estados Unidos.

La droga, el crimen organizado, las armas, los emigrantes, todos pasan por ese gran corredor en que se ha convertido la región. Para todo ese tráfico de cosas y personas, la debilidad institucional de los países es una ventaja. El problema del creciente armamentismo va ligado al deterioro de la seguridad ciudadana, la debilidad de las policías, la ausencia de una política más cooperativa entre los estados y a la falta de priorización de los gobiernos en el tema de la seguridad.

A pesar que la proliferación de armas y el incremento de muertes en la región por armas de fuego es una tendencia ascendente, ni los gobiernos ni la sociedad civil perciben el combate a este problema como una prioridad. Las armas ligeras están ligadas a todos los problemas de seguridad de los países. En el ámbito interno desde las pandillas juveniles, la delincuencia común y el crimen organizado, pasando por el incremento de las empresas privadas de seguridad. En el ámbito externo, el tráfico ilícito de drogas, mercadería y personas, va acompañado también de las armas. Los conflictos abiertos que flanquean la región favorecen a su vez, el acceso, compra y mercadeo de todo tipo de armamento.

El tráfico ilícito de armas es el más pernicioso porque atenta contra la inestabilidad de los gobiernos, sea porque alimentan grupos irregulares o porque convierten la inseguridad ciudadana en un tema de descontento social permanente. A nivel continental este problema genera un foco de inestabilidad latente que puede derivar en conflictos internos o fronterizos.

El uso, portación, difusión y comercio internacional de armas de fuego es un fenómeno complejo y violento, que afecta cada uno de los niveles de desarrollo de nuestras sociedades Centroamericanas. *“Como instrumentos de la violencia, hay indicios claros de que las armas pequeñas contribuyen a la destrucción humana y social, a la vez que ponen en peligro los derechos humanos y el estado de derecho y socavan la estabilidad política y el desarrollo económico.”*ⁱ

La violencia en la región centroamericana, no se da por sí misma, ni de manera aislada. La violencia es, en esencia, producto de una cultura política, histórica y socialmente determinada, que atribuye a su aplicación ventajas sobre otras formas de relación de conflicto, como podrían ser la negociación o la aplicación formal de la justicia.ⁱⁱ

1 Las armas de fuego en la seguridad y defensa regionales: problemas de la transición

1.1 Las contradicciones sociales del post-conflicto

Una sociedad que se ha enfrentado a la guerra interna, es una sociedad fragmentada y dividida por el temor y la desconfianza generada de la situación del conflicto. Una sociedad que sale de la guerra tiene como práctica resolver sus conflictos por la vía violenta, tanto en el ámbito familiar, como en el comunitario y nacional.

Una característica de los conflictos vividos en la región centroamericana, es el involucramiento de la población en el enfrentamiento directo, bien como grupos de población de apoyo a los grupos guerrilleros, bien como paramilitares organizados por el ejército.

Esta situación necesariamente crea un aprendizaje de la forma de afrontar los problemas sociales, donde se privilegia como finalidad, acabar con el enemigo. No dialogar ni buscar soluciones alternativas. Esta forma de actuar crea una práctica de violencia cotidiana que se constituye en el gran valladar de los procesos de paz. Los acuerdos alcanzados en la región entre gobiernos y fuerzas insurgentes, orientados a construir sociedades democráticas y pacíficas, chocan en el proceso de implementación, con sociedades confrontativas, desunidas, sin visión compartida de nación y donde el más fuerte siempre tiene la razón.

Por ello, los acuerdos de paz no encuentran un sustento social que los consolide y apoye, llegando al absurdo, como en el caso de Guatemala, en que la población votó en contra de las reformas constitucionales que le daban marco jurídico a los principales compromisos de la paz.

En este ambiente, la población asocia la idea de posesión de armas a seguridad. El uso de armas es algo cotidiano para todas aquellas personas que se vieron implicadas directamente en el conflicto. Grandes porcentajes de la población adulta sirvieron en las filas de los ejércitos, de las guerrillas o de los paramilitares. Todos ellos saben manejar armas y se acostumbraron a ellas. Si a esto unimos la facilidad y alcance que se tiene para adquirirlas, sobre todas aquellas que quedaron circulando después de finalizado el conflicto, nos encontraremos con una sociedad armada y acostumbrada a creer que salvaguarda su seguridad por medio de las armas.

El problema comienza cuando, disueltos los grupos armados, el control que se ejercía por sus respectivos mandos ya no está presente y el criterio del uso del arma se convierte en un criterio individual. Hablamos de grupos organizados y estructurados para la defensa comunitaria, que se quedan con el entrenamiento, costumbre, organización y armas, pero sin enemigo.ⁱⁱⁱ Es fácil caer en la tentación de utilizar las armas para beneficio propio, solos o en pandillas. Por eso revierte fundamental importancia la reinserción laboral de los ex combatientes, así como la reconversión del pensamiento de todos los grupos. De no hacerse, se constituyen en problemas latentes para la gobernabilidad democrática.^{iv}

1.2 La transición desde un concepto de Seguridad Nacional a uno de Seguridad Democrática

Después de varios años de guerra interna, una sociedad que ha firmado la paz, debe enfrentar el desmontaje de toda una estructura de seguridad y defensa organizada para atacar al enemigo interno, con los costos de violación a los derechos humanos que esto tiene, para pasar a un

modelo de defensa basado en el concepto de seguridad democrática. Los procesos de negociación y paz fijan las metas a mediano y largo plazo, pero el cómo lograr esas metas no se incluye en los acuerdos alcanzados. Por ello, los procesos de transición suelen ser dificultosos y faltos de consenso, pues todavía están abiertas las heridas del conflicto.

Durante los conflictos enmarcados en la doctrina de Seguridad Nacional los Estados se enfrentaron a los ciudadanos. Todo aquel que ejercitara derechos de libertad de asociación y pensamiento de cambio y justicia social, era sospechoso de atentar contra la estabilidad nacional. Este clima de incertidumbre hizo que muchos miembros de partidos democráticos y de pensamiento de oposición, que sin ser de la guerrilla se sentían perseguidos por sus ideas, vieran en las armas de fuego una posibilidad de defensa frente a la persecución de las fuerzas de seguridad. Las armas se convirtieron en algo usual entre los políticos, promoviendo el uso de guardaespaldas. Por otra parte, se desarrollaron estructuras paralelas de civiles que colaboraban con las fuerzas armadas y a quienes se extendía sin ningún control, licencias de tenencia y portación de armas.

En el nuevo marco de la seguridad democrática, las amenazas al país trascienden el ámbito de la seguridad y defensa en sentido estricto y abarcan los campos de la pobreza, la discriminación y los desastres naturales. Ya no se trata de controlar al ciudadano, sino de defenderlo y establecer relaciones de confianza que permitan la participación en la toma de decisiones y en las soluciones a los diferentes problemas nacionales. La transparencia y la auditoria social se convierten en los nuevos mecanismos de control desde la sociedad hacia sus gobernantes.

En definitiva, los cambios son demasiados para que las viejas estructuras acostumbradas a controlar y reprimir, ahora se conviertan en organismos abiertos y democráticos. Las instituciones están conformadas por hombres y mujeres y cambiar las actitudes es quizás la tarea más difícil. El efecto real es la existencia durante la etapa de la transición, de estructuras paralelas. Las estructuras que aceptan los cambios y actúan enmarcados en las nuevas disposiciones y aquellos quienes todavía piensan que el poder significa control. Todo ello produce la coexistencia de poderes paralelos que utilizan las estructuras institucionales para continuar con las prácticas del pasado. Todavía muchos ciudadanos se sienten amenazados por esos poderes ocultos, y frente al temor, el uso de las armas continúa siendo una práctica. Como lo es para quienes siempre tuvieron acceso a las mismas, como colaboradores de las fuerzas de seguridad del Estado.

1.3 Separación de funciones entre las fuerzas armadas y las policiales

Uno de los cambios fundamentales por los que atraviesa la región, es precisamente la separación de las funciones de defensa y seguridad en manos de diferentes instituciones: las fuerzas armadas encargadas de la defensa externa y la policía (en manos civiles), de la seguridad interna. En dos países, Costa Rica y Panamá, el ejército fue abolido, quedando la seguridad en su conjunto en manos de la policía.

Los ejércitos provenientes de la doctrina de Seguridad Nacional centralizaban todo lo referente a la defensa y la seguridad, incluyendo el pensamiento y conocimiento. En la nueva etapa democrática, el desconocimiento de los civiles de los temas de defensa, afecta el pleno ejercicio del poder civil. Esto se extiende a los nuevos cuerpos policiales, quienes tienen que hacerse cargo de la seguridad interna en sociedades que reclaman control, violencia y represión hacia los delincuentes.

En los países en que las fuerzas armadas se encargaron de la seguridad interna y externa, se crea un vacío de presencia en el interior de los países, provocando un incremento a la sensación de inseguridad de los habitantes. En el ejercicio de la tarea de seguridad ciudadana concebida en el nuevo marco de la seguridad democrática, los policías deben orientar su labor a la defensa de los derechos básicos de la población. Esto contrasta con la demanda ciudadana de mano dura, demanda que refleja la utilización de la violencia como corrector por excelencia, siguiendo la práctica proveniente del pasado.

Por otro lado, la distensión de la paz hace emerger la delincuencia común, antes oculta por el mismo conflicto y retenida por el control ciudadano que ejercían las fuerzas armadas. Esto dificulta el crecimiento de las nuevas policías que se ven desbordadas por las urgencias de la población y la profesionalización y expansión de sus instituciones. Tienen que escoger entre crecer en número o invertir en especialización de los diferentes servicios. La ausencia de servicios especializados afecta la posibilidad de control sobre el tráfico ilícito de las armas.

Con la finalización de los diferentes conflictos armados, asistimos a lo que la mayoría de los centros urbanos percibe como una intensificación de los hechos de violencia común y organizada que llega a niveles agobiantes para amplios sectores de la población. Los sectores privados están gastando más dinero cada día en servicios armados de seguridad privada.

El grado de separación de funciones entre la estructura militar y la policial puede medirse en la separación y actuación de los servicios de inteligencia. Durante el conflicto armado la inteligencia militar suele tomar el control de toda la inteligencia del país, utilizando los servicios policiales como apéndices para su estrategia. En tiempos de paz y frente a la división de tareas, la reconstrucción de la inteligencia civil suele ser el gran desafío. Sin embargo lo complicado de la tarea hace que se caiga en la tentación de seguir dependiendo de la inteligencia militar, creándose un vacío en los temas que no se puede dar un seguimiento inmediato. Las demandas de seguridad contra la delincuencia común y el crimen organizado dejan de lado la necesidad de obtener información que lleve a poder combatir los grandes flujos de armamentos que se trasiegan en la región.

Por otra parte, el control sobre las armas residía en las estructuras militares. En muchos casos, ese control debe pasar a manos policiales, sin estar éstas preparadas para ejercer un adecuado seguimiento del registro y control de las armas legales. El vacío resultante se refleja en el incremento de las armas ilegales que circulan en el interior de los países.

1.4 Marco normativo débil

La transición hacia el Estado democrático se refleja en el marco normativo y legal. Muchas leyes fueron producidas dentro de la doctrina de seguridad nacional y una estrategia de contrainsurgencia. Este marco legal debe transformarse para permitir la consolidación de la seguridad democrática. Sin embargo, las sociedades siguen aferradas a los conceptos tradicionales de seguridad. Confiando en el uso de la fuerza y desconfiando de la capacidad y neutralidad de las instituciones del Estado que deben garantizar su seguridad.

Esto provoca que sea la misma población la que ejerce presión sobre los partidos políticos para evitar que se impongan normas que se orienten hacia un mayor control y restricción del uso y portación de las armas por parte de civiles. Sobre todo los grupos de poder económico quienes, frente a la debilidad de las fuerzas policiales, siguen demandando el uso de armas para defenderse de la creciente delincuencia.

Por otra parte, la diversidad de leyes que existe entre los mismos países de la región, dificulta el poder establecer una estrategia compartida para poder regular por igual el acceso a las armas de fuego y las penalizaciones por transgredir la ley, evitando que los grupos interesados se aprovechen para basarse en aquellos países con leyes más laxas, pero contaminando al resto de países con sus operaciones ilícitas.

1.5 El crimen organizado y la impunidad

Los conflictos regionales permitieron el surgimiento de estructuras que aprovechaban el desorden y la debilidad institucional para desarrollar acciones ilícitas. Muchas de estas estructuras fueron y son comandadas por personas provenientes de las mismas fuerzas de seguridad del Estado. En algunos casos estas estructuras fueron utilizadas para la represión a cambio de no impedir su funcionamiento.

En el caso de las armas de fuego, las partes en conflicto generaron una demanda que inundó de armas a bajo precio a las sociedades centroamericanas. El flujo entre ejércitos y guerrillas también se estableció, armando redes de tránsito y pasos fronterizos. Finalizado el conflicto, estas redes permanecieron, acomodándose a los cambios.

El crimen organizado atenta contra la gobernabilidad, pues se enraíza en la estructura misma del Estado. La debilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia durante la etapa de transición post-conflicto se agudiza por la permanente intromisión de las redes del crimen que impiden una verdadera y pronta administración de justicia.

La connivencia entre estas bandas y algunas autoridades hacen también que los pocos controles que puedan ejercerse sobre la delincuencia de este tipo, no sean efectivos. Si se avanza en cuanto a la detección y enjuiciamiento de los culpables, éstos lograrán burlar el castigo saliendo libres por ausencia de pruebas. Si se logra su encarcelamiento, lograrán fugarse de la prisión más segura.

Las armas de fuego son el instrumento básico de evasión de la justicia para los grupos criminales. Por ello toda acción criminal ejercida por estas bandas, va acompañada de la demanda de grandes cantidades de armamento. Dado que la ventaja comparativa de las bandas organizadas que actúan en Centroamérica es precisamente la ubicación geográfica de la región como pasillo de tráfico de ilícitos hacia el norte y hacia el sur, están estructuradas regionalmente. Ello hace que el tráfico de armas sea incontrolable y fuera de toda dimensión, sobre todo frente a la demanda que Colombia y su conflicto generan. Este hecho acompañado de la ausencia de una estrategia regional de los gobiernos para combatir el armamentismo, y sobre todo la invisibilidad de la problemática para las sociedades centroamericanas, hace de las armas de fuego un foco de creciente inestabilidad en la región.

2 Anatomía de un caso de tráfico de armas en la región

El último caso conocido de tráfico de armas a nivel regional, puede ilustrar los elementos necesarios para trazar una política de cooperación regional en torno a este tema. A través de informaciones de prensa de los cuatro países implicados se conoció la forma de operación de una compra de armas en forma legal, que terminó en manos de los paramilitares colombianos.

Durante los años de 1999 y 2000, una empresa de capital israelí con sede en Guatemala (Grupo Internacional de Representantes S.A –GIRSA-), representante centroamericano a su vez, de Industrias Militares de Israel, establece la negociación con la Policía Nacional de Nicaragua para el trueque de 3,000 fusiles AK de fabricación soviética y 2.5 millones de cartuchos para dichas

armas, por 100 ametralladoras Mini Uzi y 465 pistolas Jericó. Las armas adquiridas por dicho trueque estaban destinadas según papelería mostrada a las autoridades nicaragüenses por los representantes de GIRSA, a la Policía de Panamá.

El armamento es entregado a GIRSA por las autoridades nicaragüenses en octubre del 2001 y es custodiado hasta llegar al puerto El Bluff, en Bluefields. En dicho puerto atraca el barco “Otterloo” proveniente de México y que transportaba oficialmente pelotas plásticas, aduciendo necesidades de reparación. Este buque estaba en venta en ese momento, como se descubrió posteriormente. El 2 de noviembre zarpa el Otterloo con las armas a bordo, con destino Puerto Colón, en Panamá. Sin embargo, sigue de largo y atraca ocho días después en Urabá, Colombia, donde se autoriza el descargue de las armas y se trasladan a Antioquia y Córdoba. Un mes después el barco regresa a Colón, Panamá. En ese mismo mes funcionarios del gobierno panameño se enteran de la supuesta compra de las armas y pregunta dónde se encuentran.

El escándalo estalla cuando un diario de Bogotá informa sobre el cargamento de armas comprado presuntamente por Panamá y que ha ingresado en territorio colombiano, yendo a parar a las manos de los paramilitares de la Autodefensas Unidas de Colombia. El gobierno panameño pide explicaciones y aduce nunca haber solicitado dicho trueque. Así mismo informa que la papelería aportada por GIRSA es falsa. La presidenta de Panamá solicita la intervención de la OEA para deducir las responsabilidades. Hasta la fecha la única sanción que se ha obtenido es la sanción a GILSAR por parte del Departamento de Control de Armas y Municiones de Guatemala, dependiente del Ejército. Hay que anotar que esta empresa ha vendido armas en varias oportunidades al mismo Ejército y a la Policía Nacional Civil de Guatemala.

Es sabido que la mayor parte de las armas en el ámbito mundial se producen en forma lícita por parte de las grandes industrias de armamento. El ejemplo anterior muestra los pasos que normalmente siguen los flujos de armas para convertirse de lícitas a ilícitas:

- a. Venta de los productores legales a Gobiernos y comerciantes privados
- b. Venta ilegal por parte de los comerciantes
- c. Trueques de gobierno a gobierno, o de gobierno a privados
- d. Pérdida o robo
- e. Desvío intencional hacia otro comprador
- f. Desvío de excedentes
- g. Falsificación de documentos o importación ilegal sin ellos

Si se hubieran aplicado por parte de los actores gubernamentales centroamericanos los instrumentos jurídicos existentes a nivel regional, este desvío de armamento nunca se hubiera realizado. Existe el compromiso del intercambio de la información entre los gobiernos, para garantizar que no sucedan hechos como éste.

3 Elementos para una política regional de control de armas

Hasta la fecha, existen pocas investigaciones sobre los efectos del armamentismo en la región, las causas del mismo y los efectos en las diferentes sociedades, que puedan contribuir a ir

creando una visión más crítica de la sociedad respecto al uso de las mismas. Por otra parte, tampoco existen estrategias conjuntas para incidir en el seguimiento y aplicación por parte de los gobiernos, de los tratados regionales respecto al tema, así como, producir la información necesaria que permita la toma de decisiones de los actores de la sociedad civil, de los Congresos y de los Gobiernos para alcanzar acuerdos y modificaciones en las políticas y leyes respectivas.

Así mismo, se hace necesario investigar sobre aspectos poco conocidos de la conexión con las armas pequeñas, como por ejemplo el papel que desempeñan terceras partes en el tráfico de armas nacional, la función de los servicios de inteligencia occidentales en el suministro de armas, la militarización de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas y su represión y los vínculos entre el tráfico de armas ligeras y el tráfico de otros productos.

Por la ausencia de información sobre el trasiego, efecto reales de la proliferación de armas ligeras y las políticas y leyes existentes, es difícil establecer un monitoreo continuo y efectivo sobre la compra, distribución uso y uso indebido de las armas ligeras, que permita realizar una incidencia efectiva por parte de la sociedad civil sobre los gobiernos y los cuerpos de seguridad.

Una política regional implica una serie de medidas complementarias que permitan crear un ambiente de seguridad y confianza, así como establecer mecanismos estrictos que impidan el flujo y proliferación de armamento. De acuerdo al mandato de La Haya: *“...para terminar con el flujo de armamento incluyen: controlar transferencias legales entre los estados, así como la disponibilidad, uso y almacenamiento de armas pequeñas. Prevenir y combatir transferencias ilícitas; prevenir transferencias de armas a violadores de los derechos humanos; trabajar para incrementar la transferencia y la responsabilidad; reducir la demanda de armamento revirtiendo la cultura de la violencia; reformar las instituciones de seguridad pública, creando normas de no-poseción, promoviendo la desmovilización y reintegración efectiva y sostenida de excombatientes..”*.

Por todo lo anterior, podemos plantear como elementos básicos para una política regional en esta materia, los siguientes:

3.1 Promover los instrumentos nacionales, regionales e internacionales existentes

Centroamérica cuenta con varios instrumentos regionales que puede constituir una base para el control de la proliferación de armas en la región. Entre ellos se encuentra el Tratado Marco de Seguridad Democrática, la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, Convención interamericana sobre transparencia en las adquisiciones de armas convencionales y el Plan de Acción de la ONU. A nivel nacional se cuenta con los tratados de paz de los países, los que mencionan regulaciones en la materia.

En realidad, lo que se trata es que los gobiernos conozcan las disposiciones regionales, las utilicen y las cumplan. La voluntad política es determinante en estos temas. El marco normativo que proporcionan los tratados regionales también puede constituirse como guía para las transformaciones de los marcos jurídicos nacionales.

3.2 Establecer un procedimiento para la compra de armas gubernamental y privada

Sería necesario establecer un procedimiento estándar aprobado por todos los países, con la finalidad de poder implementar el rastreo de las importaciones. Ello implicaría no sólo el marcaje en el momento de la fabricación, sino la marca por parte de quien lo importó. Esta

información permitiría hacer un seguimiento de la ruta de transporte de las armas, así como, en qué momento pasaron del mercado legal al ilegal.

Por otra parte, es indispensable el nivel de información que debería reglamentarse promoviendo la confianza entre los Estados de la región. Si no se dispone de la información adecuada, establecer una coordinación entre los servicios de inteligencia policiales, que permitan un seguimiento mejor de los flujos de armamento que entran y salen de la región, sería algo deseable. En esta línea de pensamiento, el control aduanero intra regional con medidas específicas de intercambio de información se convierte en una gran posibilidad de cooperación entre las autoridades centroamericanas.

La importancia de marcos jurídicos adecuados a nivel nacional, orientados a mayor control, restricción y penalización son indispensables, así como intentar lo más posible la homologación de las leyes en el ámbito regional. Igualmente, adoptar normativas para el control más eficiente de las empresas intermediarias es otro aspecto fundamental para poder regular el ingreso al mercado de las armas que se importan.

3.3 Establecimiento de un mayor control sobre los puntos de demanda de las armas

El punto principal de la demanda en los países de la región lo constituye por una parte, las fuerzas de seguridad del Estado, y por otra, las empresas privadas de seguridad. Por ello debe establecerse un procedimiento transparente en la adquisición de armamento que vaya a ser utilizado por las fuerzas armadas o policiales, así como, un control más efectivo sobre la compra y utilización del armamento por parte de las empresas privadas.

En los países centroamericanos el fenómeno creciente de las empresas privadas es una realidad. En el caso de Guatemala, por ejemplo, mientras se cuenta con 20,000 policías, las empresas privadas aglutinan a más de 50,000 hombres, constituyéndose en un foco de posible impunidad por la incapacidad del Estado de poder supervisar la actuación de las mismas.

Para ambos, el marcaje del armamento adquirido debería ser una de las condiciones, con la intención de poder rastrear el uso correcto de las armas que se compran y evitar su desvío o uso para otros fines.

Otra medida que debiera adoptarse de inmediato, es la destrucción de las armas recolectadas durante el conflicto, así como todas aquellas que se encuentran almacenadas por haber sido decomisadas por las fuerzas policiales. Esto evitaría la posibilidad de un reingreso ilegal al mercado, así como, la acumulación inútil de las armas.

3.4 Transparencia y fiscalización

Existe una tendencia a ocultar las transacciones que sobre armas realiza el Estado. Esto permite que eventualmente se realicen desvíos hacia otros países mediante documentación falsa, así como, a enmascarar compras de armamentos individuales, haciéndolos pasar como compras institucionales. Si se toma en cuenta que los dueños de las empresas privadas de seguridad provienen en su mayoría de las fuerzas armadas y policiales, es mucho más urgente un acuerdo de intercambio de información, así como una política de mutua confianza que permita intercambiar información necesaria para controlar la legalidad de las transacciones de armamento.

Por otra parte es necesaria, hoy más que nunca, la participación de la sociedad civil en el monitoreo y exigencia de transparencia hacia los actores gubernamentales. Los controles a los

rubros presupuestarios y el monitoreo de las importaciones de armamento constituyen instrumentos valiosos para poder dar seguimiento a los gastos en armas por parte de las entidades gubernamentales. Para ello es importante también el intercambio de información entre las mismas organizaciones de la sociedad civil a nivel regional, generando observatorios regionales.

3.5 Promoción de una cultura de paz

Como medida a mediano y largo plazo es prioritaria la generación de campañas regionales y nacionales orientadas a sensibilizar a la población sobre el efecto de las armas ligeras en la sociedad. Solo en la medida en que la sociedad se involucre y rechace el uso de armas por civiles, podrá avanzarse en controlar más efectivamente el flujo y proliferación de las armas, así como, en privilegiar la solución de los conflictos por la vía del diálogo y la negociación.

La participación de la sociedad en la búsqueda de la solución a la problemática de la proliferación de armas en Centroamérica es esencial. “Para que los esfuerzos por prevenir, resolver y transformar el conflicto violento sean efectivos a largo plazo, deben basarse en la participación de grupos de la sociedad civil local, comprometidos con la construcción de la paz.”^{vi}

En definitiva, la garantía de la seguridad ciudadana, el respeto a los derechos fundamentales de los hombres y mujeres, la contribución de un clima más justo y sin violencia en el que pueda alcanzarse la paz de modo sostenible y el desarrollo, son los principios fundamentales sobre los cuales se deberá trabajar a nivel regional.

ⁱ “*Red de Acción Internacional sobre Armas Ligeras*”. IANSA. Documento de Constitución. Mayo 1999. Marco Político. Pp.3.

ⁱⁱ Como ejemplo, en 1996 ingresaron a Guatemala 64 millones de cartuchos para armas de fuego. En 1997, 27 millones. De enero a octubre de 1998 habían ingresado de 30 a 32 millones.

ⁱⁱⁱ En Guatemala, los integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas por el Ejército, llegaron a ser en el momento álgido del conflicto, más de 800,000 hombres, en una población de 8 millones de habitantes.

^{iv} En este momento en Guatemala existe un alzamiento de los ex patrulleros utilizados por el ejército, con reivindicaciones de carácter económico.

^v Llamamiento de La Haya por la Paz. Preámbulo. Agenda del siglo XXI por la Paz y la Justicia. Borrador de discusión. Febrero 1999

^{vi} *Ibíd.*

Author Biography:

de León-Escribano, Carmen Rosa. Socióloga con maestría en sociología del Desarrollo para América Latina. Investigadora y administradora de proyectos, con experiencia en desarrollo comunitario, relaciones civiles-militares y reforma policial. Columnista y analista política.